



Sohail Noori y sus cuatro hijos, después de tres meses en un hostel pensado para una acogida de emergencia. / JUAN BARBOSA

MARÍA MARTÍN, Madrid
Sohail Noori, su mujer y sus cuatro hijos son afganos, pero no llegaron a España en un avión fletado por el Gobierno. Su evacuación fue distinta y más demorada que la de los más de 2.000 compatriotas que el Ejecutivo consiguió traer sanos y salvos en agosto ante decenas de cámaras de televisión. La familia tardó unos cuantos meses en reunirse fuera de Afganistán, arreglar visados y salvoconductos hasta que, el pasado 10 de enero, llegó al aeropuerto de Barajas desde Pakistán. A ellos nadie les esperaba cuando aterrizaron. "Estábamos solos. Tenía algo de dinero para un taxi, pero no sabíamos adónde ir", recuerda.

Este antiguo colaborador de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está desde entonces en un albergue de primera acogida estatal en un polígono a las afueras de Madrid. Este hostel de una estrella, gestionado por Cruz Roja, se considera un recurso de emergencia y, aunque está pensado para estancias que no superen los 30 días, Noori y su familia llevan en él más de tres meses. Siguen esperando a que los trasladen a un lugar donde recomenzar su vida, cocinar su propia comida, tener clases de español con regularidad, dejar de compartir baño con otras 15 familias o llevar a sus hijos, de 12, 9, 6 y 4 años, al colegio.

La familia llegó a firmar su consentimiento para instalarse en Córdoba. "Mi mujer y yo estábamos muy entusiasmados: al menos íbamos a dejar el hostel y estar en un sitio más cómodo, un piso", explica Noori. Pero el plan se truncó rápido. "A los pocos días nos dijeron que ya no iríamos, que esas plazas serían para las personas que vienen de Ucrania", asegura. "Los afganos que conozco que llegaron en agosto y fueron recibidos por los ministros no han tenido los problemas que te-

En paralelo al despliegue para los ucranios, el sistema sigue recibiendo a miles de solicitantes de asilo

Los refugiados fuera de los focos



Un grupo de afganos acogidos en un hostel de Madrid. / J. B.

nemos nosotros", lamenta. En tres meses, sus hijos solo han ido al colegio 10 días.

La guerra en Ucrania y sus más de cuatro millones de desplazados (se calcula que más de 110.000 han llegado a España) han desviado el foco de otros refugiados. El conflicto no ha frenado los flujos de los solicitantes de asilo a territorio español. Al contrario. Los afganos, protagonistas también de una gran operación de acogida el verano pasado, siguen llegando, así como miles de personas provenientes, sobre todo, de Venezuela y Colombia.

Desde el 28 de febrero, más de 12.000 personas han registrado una solicitud de protección internacional en España, según datos provisionales de la Agencia Euro-

pea para el Asilo (EUAA, por sus siglas en inglés). España, tras Alemania, es el segundo país de la UE con más peticiones en este periodo de guerra en el que todos los sistemas de acogida europeos se están poniendo al límite. Es también el segundo país con más peticiones en lo que va de año (28.988), un aumento del 122% respecto de 2021.

El despliegue de recursos para acoger a los ucranios ha sido extraordinario y, según las últimas cifras oficiales, se han habilitado más de 20.000 camas. La acogida y el papeleo funcionan sin problemas relevantes y los socios europeos se han interesado por la gestión española de esta crisis. Pero el sistema de asilo sigue presentando dificultades para el resto.

A la entrevista con Noori, se unen otros cinco afganos, que residen en el mismo hostel. Tres de ellos aparecen en chancas. "Hemos pedido zapatos y ropa para el frío, pero nos dicen que no tienen", cuenta Fátima, nombre ficticio de una mujer de 49 años. La comida concentra varias de sus quejas, sobre todo ahora que celebran el Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes. "La comida no es suficiente para romper el ayuno de todo el día", lamenta Sayed, que era juez en su país. Sin dinero de bolsillo, tampoco pueden comprar su propia comida.

Les inquietan sus futuros planes profesionales porque desconocen qué deben hacer. También la asistencia médica, ya que ellos o sus familiares arrastran enfermedades como asma y diabetes. Querrían que los trabajadores sociales les acompañasen más para avanzar en los diagnósticos. "Hemos tenido que ir tres veces al hospital y las tres me han recetado ibuprofeno", se queja Noori. Todos transmiten la "vergüenza" que sienten de pedir cosas que consideran básicas.

Las quejas de los afganos no son raras. Es común, además, que

refugiados con un estatus social más alto vean cómo sus expectativas se dan de bruces con la realidad de un sistema limitado. Una encuesta elaborada por un grupo de voluntarios que apoya a los afganos que trabajaron en la AECID da pistas de los principales obstáculos. El sondeo, realizado entre 226 afganos, refleja una buena percepción general del proceso de acogida, pero las peores notas se concentran, precisamente, en el alojamiento, la comida y la formación para el empleo.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, competente en la acogida de solicitantes de asilo, advierte de que algunos casos concretos no reflejan la realidad del sistema de acogida. Una portavoz afirma que el ministerio mantiene contacto continuo con las ONG en las que se delega la atención a los refugiados para dar respuesta a sus necesidades. Cruz Roja asegura que ofrece "la mejor atención posible" y señala la complejidad de adaptar un sistema finito a una demanda creciente y a perfiles de solicitantes muy distintos de los que España solía recibir.

Blanca Garcés, investigadora del laboratorio de ideas CIDOB, recuerda que el sistema de acogida se basa en el principio de autonomía, es decir, que los solicitantes de asilo puedan hacer su vida cuanto antes. "A mayor distancia cultural y menor red de contactos, más dificultades tienen para rehacer sus vidas y, cuando las dificultades son mayores, el sistema se hace claramente deficiente", explica Garcés. "Las necesidades son distintas en función de la proximidad cultural y lingüística. No es lo mismo una familia venezolana que una afgana", añade.

Más allá de la acogida, las numerosas quejas enviadas al Defensor del Pueblo apuntan a las dificultades de acceso al procedimiento de asilo, una responsabilidad del Ministerio del Interior.

En Granada, Feraidoon Zamani, otro colaborador afgano de la AECID, pide ayuda. El pasado 17 de marzo fue a comisaría a solicitar una cita para oficializar su demanda de asilo y las de su mujer y sus dos hijos, y no podrá hacerlo hasta finales de junio del año que viene. Un año y tres meses de espera. Un compatriota suyo, su mujer y sus cuatro hijos están en la misma situación. La entrevista es fundamental para admitir a trámite su petición y poder trabajar legalmente. También es la llave para acceder a fases de acogida de más autonomía, con ayudas al alquiler, por ejemplo, y salir así de recursos más precarios.

Interior no ha explicado a qué se debe el retraso exagerado en la cita de Zamani. Aunque este es el caso más grave, los plazos están desfasados en varias regiones y se tarda hasta ocho meses en formalizar la solicitud, según el recuento de diversos letrados dedicados a acompañar a los solicitantes de asilo. Los abogados destacan la dificultad para conseguir las citas, una misión casi imposible en varias provincias. "Vamos a estar al menos un año y tres meses para obtener derechos que otros compatriotas [llegados en agosto] obtuvieron en seis meses", se queja Zamani. "Es mucho tiempo sin poder trabajar y sin los mismos derechos que cualquier ciudadano".